

Empresarios ilegales y región: La gestación de clases dominantes locales

Alvaro Camacho Guizado ()*

Resumen

En torno al narcotráfico ha predominado teorías de orden criminológico, médico, conspiratorial, gestadas por los intereses gubernamentales de los países consumidores. En esta oportunidad se elabora una aproximación sobre los efectos más complejos y duraderos de este fenómeno en algunos países de la región. Así esta ponencia intenta abordar uno de los hechos centrales que surge en torno al negocio de la droga, como es la configuración en el país (caso Colombia) de una nueva fracción de clase, que gracias a sus gigantescas acumulaciones y al proceso de "lavado" de capitales, tiende a solidificarse como una fuerza social cuyo peso en la estructura social no se puede desconocer y que no es de extrañar que, con el tiempo, esa fracción de clase se vaya legalizando y por tanto ocupe posiciones de prestigio y poder que hoy le son negados en virtud de su ilegalidad. En fin este artículo pretende examinar algunos de los procesos que se están dando desde una perspectiva regional.

Términos Claves: Narcotráfico, nueva fracción de clase, región, Colombia, América Latina.

Abstract

The work on narcotrafficking has been dominated by the governmental, medical, or conspiratorial theories. This article elaborates an assessment of the most complex and enduring effects of this phenomenon in a few of the countries in the region. The paper thereby attempts to deal with one of the central facts emerging in relation to drugs, this being the configuration in the country (the Colombian case) of a new class fraction. This fraction, thanks to its huge accumulations and the "laundering" of capital, has tended to solidify itself as a social force whose weight in the social structure cannot be ignored. Nor is it unusual that, with time, this fraction will begin to be legalized, thereby occupying positions of power and prestige that today are denied them in virtue of their illegality. Finally this article attempts to examine some of the processes which are emerging, considered from a regional perspective.

Key terms: narcotraffic, new class fraction, region, Colombia, Latin America.

**(*) Sociólogo, Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.*

INTRODUCCIÓN

El hecho de que en torno del narcotráfico hayan predominado teorías de origen criminológico, médico y conspiratorial gestadas por los intereses gubernamentales de los países consumidores, análisis que privilegian lo judicial, asistencial, policial y militar, ha dificultado el estudio de algunos de los efectos sociales más complejos y duraderos en algunos de los países que, como Colombia, han experimentado el fenómeno con el mayor rigor.

Uno de esos efectos es justamente el hecho central de que en torno del negocio se ha venido configurando en el país una nueva fracción de clase que, gracias a sus gigantescas acumulaciones y los procesos de lavado de capitales, tiende a solidificarse como una fuerza social cuyo peso en la estructura social no se puede desconocer. Aunque el negocio mismo del narcotráfico no tenga necesariamente una larga duración, y que tienda a reproducir, *caeteris paribus*, la historia de los cortos ciclos de exportación de productos primarios que caracterizaron a la agricultura colombiana hasta la implantación del café, no es de extrañar que con el tiempo esa fracción de clase se vaya legalizando y por tanto ocupe posiciones de prestigio y poder que hoy le son negadas en virtud de su ilegalidad. En otras palabras, en este proceso se tienden a consolidar clases sociales que, enriquecidas en la ilegalidad, la barbarie y la violencia, aspiran a convertirse en nuevas clases dirigentes.

Este fenómeno ya había sido insinuado años atrás, a raíz de los desarrollos tempranos de la producción y exportación de marihuana y los efectos que las acumulaciones de capital en nuevas manos producían en algunos campos de la actividad económica y la acción política¹. El fenómeno en ese momento fue descrito como el desarrollo de clases "emergentes" que podrían llegar a confrontar la hegemonía tradicional de las clases "sumergentes". Su posterior desenvolvimiento, especialmente el hecho de que uno de los llamados "carteles", se hubiera convertido en un verdadero enemigo público, a partir de su reto violento al sistema legal mediante la utilización indiscriminada del terrorismo, ha puesto en el orden del día la atención en sus dimensiones políticas, judiciales, policiales y militares, y ha relegado a un segundo plano la preocupación respecto al proceso de conformación y solidificación de esas clases "emergentes".

En este artículo se pretende examinar teóricamente algunos de esos procesos, a fin de construir un marco que facilite el desarrollo de estudios empíricos más detallados, especialmente desde perspectivas regionales. La importancia de esta tarea estriba en que, a pesar de que el fenómeno en Colombia es diferente de los países vecinos, sus efectos, muy probablemente subsistirán en ellos más allá del actual período de prohibición, condena y estigmatización internacional. En otras palabras, independientemente de las

¹ Alvaro Camacho Guizado, *Droga y sociedad en Colombia: el poder y el estigma*, Cali/Bogotá, CIDSE/CEREC, 1988.

diferencias concretas, tales efectos tienden a ser permanentes, y en consecuencia superarán los rasgos más inmediatos que caracterizan al fenómeno en la actualidad. En este sentido un estudio de esta naturaleza sobre Colombia puede servir como un de te fabula narratur.

NARCOTRÁFICO:

DE BANDAS DE DELINCUENTES A FRACCIONES DE CLASE

Ante todo es necesario hacer explícita la conceptualización que subyace en este trabajo. Puesta en sus términos más simples, como tesis central me propongo sostener que es muy probable que en Colombia algunos de los empresarios del narcotráfico tiendan a seguir un curso mediante el cual en el mediano plazo se irían transformando de jefes o miembros de bandas delincuenciales en actores sociales legitimados localmente, a través de la utilización leal de sus capitales y del abandono de la actividad delictiva. Para ello deberían concurrir tanto las políticas estatales respecto de la posibilidad de reinserción de ex-delinquentes², como algunas condiciones socioculturales y económicas de las regiones en que residen que faciliten la aceptación local de los nuevos ricos por parte de la población local, en particular quienes detentan posiciones de prestigio y poder.

En el proceso, no exento de contradicciones y conflictos, siendo el mayor de ellos la acción policial y militar del Estado central, los narcotraficantes tenderían a reciclarse primero en su papel de empresarios legales, lo cual les permitiría constituirse en una nueva élite empresarial, para luego, debidamente "lavados" sus pasados y aceptados en las estructuras social y política local y regional, entrar a formar parte de las clases dirigentes locales³.

Este proceso podría adquirir una dinámica tan fuerte que el propio Estado central se podría ver forzado a aliviar su acción judicial y policial, a actuar muy selectivamente reprimiendo sólo a aquellos narcotraficantes que se salgan del curso de acción localmente tolerado y se conviertan, por tanto, en presas adecuadas para la acción represiva. Más aún, existen serias dificultades para que el Estado pueda probar concluyentemente que los supuestos narcotraficantes son tales, a pesar de que en las respectivas regiones de residencia sea vox populi que sí lo son. Sus sistemas de manejo

²La política colombiana de sometimiento a la justicia, diseñada muy claramente para facilitar este proceso, se puede traducir, si funciona como esta previsto, que en el peor de los casos un delincuente confeso purgue una corta condena y luego halle el camino libre para disfrutar de los capitales acumulados tanto en el narcotráfico como en los negocios legales que haya logrado establecer.

³Sobre las relaciones entre los conceptos de elite y clase social, ver Anthony Giddens, The Class Structure of the Advanced Societies, New York, Harper Torchbooks, 1975; James Burnham, The Machiavellians, Chicago, Gateway, 1963; Stanislaw Ossowski, Estructura de clases y conciencia social, Barcelona, Ediciones Península; Rodolfo Stavenhagen, Las clases sociales en las sociedades agrarias, México, Siglo XXI, 1969.

del negocio los pueden colocar en una situación de semi-Invulnerabilidad respecto de los aparatos judiciales.

TERRITORIALIDAD: MODALIDADES, VENTAJAS Y REQUISITOS

La mayoría de los estudios sobre el narcotráfico en Colombia han tendido a hacer énfasis en sus dimensiones nacionales, y muy pocos esfuerzos se han dedicado a estudiar sus expresiones regionales⁴. Sin embargo, a partir de los desarrollos más recientes del fenómeno hoy día es necesario reconocer que si bien éste es nacional, e internacional, desde luego, sus características peculiares pueden variar a partir de sus diferencias regionales. Por ello es razonable sostener la hipótesis de que los procesos de inserción social de las organizaciones de traficantes que constituyen esas nuevas élites o fracciones de clase de alguna manera tienen que expresar rasgos que reflejen esas condiciones particulares locales.

Algunos estudiosos del fenómeno mafioso en el sur de Italia han constatado que las organizaciones de este tipo tienen una fuerte identidad y limitación territorial, y que a pesar de la dimensión internacional del negocio, el control regional es esencial tanto para el ejercicio del poder como para su supervivencia⁵. En su origen rural esta dimensión estaba íntimamente asociada con la naturaleza de las familias o cosche⁶, con las necesi-

⁴ Sean cuales fueren las diferencias entre los diferentes países latinoamericanos involucrados en el narcotráfico, el hecho concreto es que, si bien a Colombia, Perú y Bolivia les ha correspondido ser las amenazas de turno, a Colombia se le ha dado una atención especial, dado que su participación como distribuidora mayorista del producto la coloca en la punta de la cadena. Cfr. Guy Gugliotta y Jeff Leen, Kings of Cocaine, New York: Harper, 1990; Rensselaer W. Lee III, "Tráfico de drogas y países en desarrollo"; Ethan A. Nadelmann, "Latinoamérica: economía política del comercio de cocaína"; Richard B. Craig, "El tráfico de drogas: implicaciones para los países suramericanos"; Bruce Michael Bagley, "Colombia y la guerra contra las drogas" y del mismo autor, "¿Nueva guerra de los cien años?", todos en Juan Tokatlián y Bruce Bagley (compiladores), Economía y política del narcotráfico, Bogotá: CEI-Cerec, 1990; Jonathan Marshall, "Drugs and United States Foreign Policy"; Thomas Szasz, "The Morality of Drugs Control", ambos en Ronald Hamowy (editor), Dealing with drugs: Lexington, Mass. Lexington Books, 1987 y Rosa del Olmo, La sociopolítica de las drogas, Caracas, FACES, 1975 y La cara oculta de la droga, Bogotá, Editorial Temis, 1988. Los mejores estudios de corte regional en Colombia son los de Alfredo Molano, Selva adentro, Bogotá, El Ancora Editores, 1987; Si-guiendo el corte, Bogotá, El Ancora. Editores, 1989, y de Alejandro Reyes Posada, "Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias", Análisis Político, # 12, enero-abril de 1991. Ver también Comisión de superación de la violencia, Pacificar la paz, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, CINEP, Comisión Andina de Juristas y CECOIN, 1992.

⁵ Cfr. Pino Arlacchi, Mafia Business. The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism, Londres, Verso, 1987. Este fenómeno es también cierto en ciudades norteamericanas, a pesar de los procesos de urbanización y modernización de las mafias. Cfr. F.D. Pasley, Al Capone, Madrid, Alianza Editorial, 1970.

⁶ Conjuntos de familias asociadas en una misma actividad mafiosa. Cf. Raimondo Catanzaro, "Cosche-Cosa Nostra: les structures organisationnelles de la criminalité mafieuse en Sicile", en Cultures & Conflits, Paris, Centre d'Etude des Conflits, # 3, Automne 1991.

dades de un sistema de relaciones primarias que garantizaran legitimidad, lealtades y por ende facilitarán el control y supervivencia de los diferentes grupos.

En condiciones urbanas y modernas de operación la territorialidad, si bien sigue basada en una forma extendida de relaciones primarias, obedece preferentemente a la necesidad de mantener monopolios geográficos que reduzcan las probabilidades de conflictos internos y con otras organizaciones. De hecho, estas condiciones se constituyen en uno de las más fuertes obstáculos a la acumulación del capital de las mafias, lo que produce enfrentamientos y guerras inter-organizacionales⁷ que sólo se pueden resolver mediante la victoria que lleva a la dominación plena⁸ o una expansión del mercado que permita una negociación sin perdedores.

En cualquiera de los dos casos la estrategia central consiste en buscar la proyección a los mercados internacionales de miembros de la comunidad de origen, para efectos de garantizar lealtad y eficiencia en el proceso. Así se logra integrar a esa comunidad de origen con el nuevo ámbito internacional y conciliar estas dimensiones con la local.

La territorialidad de las organizaciones de nuevos empresarios ilegales, sin embargo, altera las pautas anteriores en la medida en que el proceso productivo de la cocaína constituye una cadena organizacional en la cual las diferentes etapas exigen condiciones especiales. De hecho, es necesario distinguir entre los procesos de producción, refinación y exportación y los de residencia y disposición de ingresos de los empresarios. En la medida en que los jefes de las organizaciones no residen habitualmente en las zonas productivas, el ejercicio del control en esta territorialidad de producción tiene que hacerse mediante una delegación explícita de poder a grupos intermedios, ya sean de la organización o de grupos locales independientes, sobre los cuales se ejerce de continuo la amenaza de retaliación en caso de que aspiren a romper la cadena. Para este fin es necesario mantener en el sitio a representantes directos, a fin de garantizar un aprovisionamiento continuo de materias primas. Para ello se requiere establecer un régimen que combine la compra permanente de esas materias primas con una visible capacidad de corromper autoridades locales y ejercer terror sobre la población productora. En otras palabras, en la territorialidad de producción no se le presentan a los grandes patrones problemas de legitimidad social, sino de eficiencia y control⁹.

⁷ Arlacchi, *Op. cit.*, pp.155 y ss.

⁸ Como parece que fue el caso de la implantación de mafias colombianas en la Florida (E.U.A.). Cfr. Guy Gugliotta y Jeff Leen, *Kings of Cocaine*, New York, Harper Paperbacks, 1990.

⁹ La literatura sobre el tema es vastísima. Cf. Christian Gros, "Los campesinos de las cordilleras frente a los movimientos guerrilleros y la droga: ¿actores o víctimas?", *Análisis Político*, # 16, mayo a agosto de 1992; Roger Cortez, *La Guerra de la coca*, La Paz, CID/FLACSO, 1992; José Antonio Quiroga, *Coca/cocaína: una visión boliviana*, La Paz, AICE/PROCOM-CEDLA-CID, 1990; Rensselaer W. Lee III, *El laberinto blanco: cocaína y poder político*, Bogotá, CEREC, 1992;

La territorialidad de residencia es completamente diferente¹⁰: el hecho de que sea el lugar de vida del nuevo empresario ilegal, a la vez que le da ventajas, le impone ciertas exigencias. Entre las ventajas están los vínculos familiares, la socialización común y las relaciones primarias que se establecen a partir de ellas, y que se pueden constituir en las bases de las nuevas alianzas que se organizan en torno del negocio.

De otra parte, el implante en la territorialidad de residencia no se puede hacer simplemente a través de organizaciones vicarias que se impongan por la utilización de la fuerza o la violencia: los requisitos de legitimación local son ineludibles, y llevan a acciones explícitas dirigidas a lograrla. El ejercicio de la filantropía y las pautas de inversión y gasto locales son algunas. Si la violencia se hace necesaria, debe estar acompañada de acciones dirigidas a lograr apoyos en al menos algún sector de la población local que la justifique.

LAS PAUTAS DE LA TERRITORIALIDAD DE RESIDENCIA

En principio se podría decir que existen varias modalidades de asentamiento local, y que estos están condicionados al menos por algunos factores económicos y socio-políticos como: 1) la situación de la tenencia de la tierra; 2) las pautas de acumulación local de capital y las formas de lavado de los excedentes acumulados; 3) la presencia o ausencia de fuerzas guerrilleras; 4) los orígenes sociales de los narcotraficantes y sus relaciones familiares; 5) la naturaleza del liderazgo político y la organización comunitaria local; 6) las formas de presencia represiva del Estado y 7) la fortaleza o debilidad de las organizaciones sociales locales¹¹.

LA TENENCIA DE LA TIERRA

Ha sido bien notoria la predilección de muchos narcotraficantes por la posesión de tierras, y de allí la importancia de considerar la situación particular de este recurso en las diferentes zonas de implantación¹². En principio, se podrían diferenciar regiones con agudos conflictos por la

¹⁰Diego García-Sayán (Compilador), Coca, cocaína y narcotráfico: laberinto en los Andes, Lima: Comisión Andina de Juristas, 1989; Diego García-Sayán (Compilador) Narcotráfico: Realidades y Alternativas, Lima: Comisión Andina de Juristas, 1990;

¹¹Puede darse el caso de que en la territorialidad de residencia se elabore alguna parte del producto final. Sin embargo, las condiciones de producción son bastante diferentes: se trata de utilizar laboratorios móviles o que se usan intensivamente por un período relativamente corto y luego se abandonan. Es necesario que se combinen la exigencia de abaratar costos manteniendo alguna producción en la territorialidad de residencia con la necesidad de no ofrecer a las autoridades la ocasión de que hagan presencia represiva en la región. Desde luego es posible que ocasionalmente, para guardar apariencias y permitir que esas autoridades muestren alguna eficacia y acallen protestas sobre su inacción, permitan alguna captura de laboratorios o lotes de la mercancía.

¹²Estudios recientes indican que los narcotraficantes colombianos poseen aproximadamente un tercio de las mejores tierras de pastos del país, lo que equivale a más o menos tres millones de hectáreas. Sobre la orientación de los narcotraficantes hacia la posesión de tierras, ver Mario Arango, El impacto del narcotráfico en Antioquia, Medellín, Editorial J.M. Arango, 1988.

tenencia de tierras en las que los nuevos propietarios proceden a eliminar físicamente a quienes la reclaman, de otras en las que tales pugnas no existen o no configuran un conflicto de magnitud mayor. En las primeras se gestan y desarrollan variantes de grupos paramilitares dirigidos contra las reivindicaciones campesinas y la presencia de fuerzas guerrilleras. Puede tratarse de pequeños grupos controlados por pocos terratenientes o de organizaciones mayores cuya dinámica desborda la defensa de la tierra y las convierte en escuadrones de la muerte. En las segundas, por tratarse de compras entre propietarios, esta forma de violencia puede estar relativamente ausente, aunque se combinan las tentaciones de compras a altos precios con las veladas amenazas en casos de negativas de vender. La inexistencia de conflictos agrarios manifiestos se traduce en que los propietarios simplemente mantienen grupos de vigilancia contra pequeños ladronzuelos, abigeos, supuestos cómplices de las anteriores autoridades estatales.

Una tercera pauta se da en zonas de colonización, en las cuales los narcotraficantes penetran detrás de los comerciantes, desalojando colonos y suscitando eventualmente la presencia guerrillera como mecanismo de protección campesina. Allí la intersección con la lucha antisubversiva es altamente probable y tiende a diluir la visibilidad de la actividad ilegal local. Es muy frecuente que se gesten alianzas entre las fuerzas del Estado y los nuevos terratenientes contra las guerrillas, aunque no se pueden descartar acuerdos entre éstos y los insurgentes para controlar el negocio. Los conflictos militares entre terratenientes y guerrillas han estado en la base del mayor desarrollo de los grupos paramilitares ampliados.

PRESENCIA O AUSENCIA DE FUERZAS GUERRILLERAS

Este factor está estrechamente relacionada con el anterior. Aunque no es posible determinar con precisión las relaciones de causalidad entre la presencia de fuerzas guerrilleras y el desarrollo de grupos paramilitares¹³, lo cierto es que su asociación ha sido suficientemente comprobada. Entre los muchos elementos de la dinámica de gestación de estos grupos están los temores de propietarios tradicionales, para quienes la presencia de la subversión se expresa en incrementos de su inseguridad y pérdida de la rentabilidad de la actividad económica. Los nuevos terratenientes aportan esa capacidad de protección y por lo mismo aseguran al conjunto de propietarios el funcionamiento de sus actividades. El que desborden el territorio específico depende tanto de las respuestas guerrilleras como de las

¹³ Los trabajos más notables sobre el paramilitarismo en Colombia son los de Alejandro Reyes Posada, "Paramilitares...", *Op. cit.*; Alejandro Reyes y Ana María Bejarano, "Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea: una visión geográfica", *Análisis político*, # 5, septiembre a diciembre de 1988; Carlos Medina Gallego, *Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia*, Bogotá, Documentos periodísticos, 1990; Jorge Orlando Melo, "Los paramilitares y su impacto sobre la política", en Francisco Leal Buitrago y León Zamora (editores), *Al filo del caos*, Bogotá, Coedición Tercer Mundo-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, 1990.

correlaciones de fuerzas que se den en el panorama nacional. En todo caso, el proteger inversiones y mantener un orden público local les permite establecer así una base de aceptación social local, aunque bordeen los límites de la legalidad y activen el proceso de despojo del monopolio estatal sobre las armas.

Ahora bien, no en todas las regiones las relaciones entre las guerrillas y los narcotraficantes son conflictivas. En algunos territorios de producción se dan procesos de complementariedad mediante los cuales las primeras pueden contribuir a proteger tanto los cultivos como la comercialización y transformación a cambio de impuestos y contribuciones. En zonas de colonización es frecuente que, dado que los medianos o grandes propietarios son los pobladores más permanentes, las alianzas se establezcan con ellos, y allí se logren algunas complicidades.

Sin embargo, es probable que se gesten procesos contrarios: bien sea porque los terratenientes se niegan a pagar los impuestos, porque las guerrillas entran en la competencia en el negocio ilegal, porque los propietarios prefieren recurrir a fuerzas armadas para la protección de la región, o, en fin, porque se altera el orden público de manera que hace necesaria la presencia de la Fuerza Pública, con lo cual se desarrolla el conflicto abierto en el que los narcos se alían con ella para combatir a las guerrillas.

Las relaciones son, pues, complejas, y pueden variar regionalmente. No obstante, el conflicto entre guerrillas, Fuerzas Armadas y nuevos terratenientes ha sido una de las principales fuentes de violencia en las áreas rurales colombianas.

LAS PAUTAS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DE LAVADO DE EXCEDENTES

La acumulación de capital de los narcotraficantes está en gran medida determinada por la naturaleza del negocio. En efecto, la actividad estrictamente traficante, aunque ilegal, se caracteriza por una orientación empresarial, con componentes como una cierta dosis de racionalidad formal, acceso al mercado, disponibilidad y movilidad de capital, cálculo del beneficio y continuidad. En este sentido, algunas de las modalidades de la violencia exhibida son un recurso al servicio de la acumulación de capital, al lado de las pautas de monopolización de algunos aspectos del negocio y las estrategias para lograr la complicidad o por lo menos la inacción de las autoridades¹⁴. De otra parte, rasgos como la ilegalidad, la violencia, el secreto, los criterios de selección y control de la fuerza de trabajo, el manejo arbitrario de códigos de conducta y la ausencia de un marco jurídico y normativo formal, los convierten en una forma *sui generis* de empresarios¹⁵.

¹⁴ Arlacchi, *op. cit.* Ciro Krauthausen y Luis Fernando Sarmiento, *Cocaína & Co.*, Bogotá Coediciones Tercer Mundo- Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, 1991.

¹⁵ Umberto Santino y Giovanni La Fiura, *L'Impresa mafiosa: Dall'Italia agli Stati Uniti*, Milán, FrancoAngeli, 1990, pp. 63 y ss.

Algunas de sus expresiones valorativas y sus gustos manifiestos por consumos suntuarios, despilfarros y exhibición, podrían indicar la ausencia de un verdadero ethos capitalista, en el sentido weberiano del concepto, lo que significa que se guiarían más por la noción de auri sacra fames (ambición de oro) que por una orientación realmente capitalista-burguesa¹⁶.

Sin embargo, la astucia y audacia demostrada en la apertura y expansión de mercados y la enorme capacidad exhibida para establecer redes internacionales de lavado de capitales deben llamar la atención acerca de su habilidad empresarial para adaptar a su beneficio unas condiciones explícitas de los mercados internacionales de sustancias prohibidas. Otra cosa es que los procesos de socialización y de adaptación a los universos culturales, valorativos y simbólicos locales, especialmente si se trata de comunidades relativamente pequeñas, impongan unas pautas de acción ajustadas a esas exigencias culturales. Los nuevos empresarios son ciertamente desviados en relación con el resto de la comunidad, pero no lo pueden ser tanto que les sea imposible convivir en ella. De allí que inclusive desarrollen al máximo algunas de esas pautas, con lo cual atestiguan tanto su pertenencia a la comunidad como su diferenciación.

De otra parte, aunque ciertamente el despilfarro atenta contra una verdadera práctica capitalista "pura", no es menos cierto que éste desempeña funciones específicas destinadas a propiciar la legitimidad: en efecto, al despilfarrar se redistribuyen ingresos, se exhiben sentimientos filantrópicos, se ganan admiraciones y, lo más importante, adhesiones y lealtades necesarias frente a una eventual represión por parte de autoridades o en casos de conflictos con enemigos. El despilfarro adquiere un sentido estratégico político y cultural, así aparentemente contradiga cánones de racionalidad económica capitalista.

Lo más conducente en la caracterización de los narcotraficantes como actores socio-económicos es considerar que se trata de un proceso de construcción de un tipo nuevo, a través de la transformación de un voraz buscador de riqueza y poder en un empresario¹⁷.

Sin embargo, si bien los rasgos menos capitalistas se exhiben en el terreno del consumo, la disposición del excedente, o el lavado de ingresos de los narcotraficantes no se agota en la actividad estrictamente económica. Como es un proceso tanto económico como social, en él los narcos establecen relaciones sociales diferenciales. Una cosa es lavar mediante la diferenciación de inversiones, y otra es hacerlo mediante la localización en sectores reducidos de la economía rural. En el primer caso se establecen fuertes vínculos de reciprocidad y beneficio mutuo con personalidades del mundo empresarial —industrial, comercial y financiero— de modo que

¹⁶ Cfr. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York, Charles Scribner's Sons, 1958, pp. 47 y ss.

¹⁷ Ver la descripción y análisis que de este fenómeno hace Thorstein Veblen en La teoría de la clase ociosa, México, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 1974.

algunas de ellas pueden constituir una red de relaciones que protege al narcotraficante y facilita su proceso de legitimación social. En el segundo, en cambio, esta red se restringe a los pocos beneficiarios directos o indirectos de las inversiones. Es claro que en esta situación las bases de legitimación son mucho más débiles y restringidas.

Las redes sociales, pues, se incrementan con la diversificación de las inversiones en el lavado de capitales. Este proceso, que atestiguaría la tendencia a la conversión de los narcotraficantes en empresarios en toda la gama de sus actividades financieras, de todas maneras guarda alguna relación con los rasgos sociales de los inversionistas. Es así como en esas inversiones se destacan la finca raíz para viviendas y comercios de altos ingresos, los negocios de diversión, compra y ventas de automóviles lujosos, mediana industria, hoteles, clubes sociales, almacenes y empresas de servicios personales. Muchas de ellas cumplen la función adicional de proveer tanto a los propios narcos como a las fracciones dominantes locales de mercancías y servicios.

En este proceso entran en escena algunos personajes cuya presencia tiende a pasar regularmente desapercibida en el estudio de las estructuras sociales del narcotráfico: los consejeros. Se trata de expertos abogados y/o financistas que desempeñan un papel de la mayor importancia: estimular la conversión de los narcos en ciudadanos respetables. Esta tarea se realiza en varios campos: en lo jurídico los asesoran y defienden frente a los eventuales conflictos jurídicos con el Estado; en lo económico buscan encauzar las inversiones en los renglones más protegidos y que combinen las conveniencias de los inversionistas y del medio social en que actúan. Sin embargo, es en lo socio-cultural en donde su gestión adquiere mayor relevancia: allí actúan como verdaderos educadores, tratando de inculcar los hábitos que las buenas costumbres locales requieren; buscan inculcar la necesidad de reducir los niveles de violencia al mínimo tolerable, a fin de evitar confrontaciones con las autoridades y asegurar una mayor aceptación local. Se encargan, pues, de inculcar los valores asociados con economías emocionales, control de instintos y "civilización" necesarios para adaptarse a la vida local y asegurar, si no para ellos al menos para sus hijos, un futuro respetable en la comunidad¹⁸.

Ahora bien, este proceso de reciclaje social requiere establecer igualmente relaciones con profesionales de varias ramas indispensables para los negocios: arquitectos, abogados, jueces, autoridades policiales y militares, periodistas, intelectuales, cambistas, administradores, financistas, decoradores, artistas, promotores... En fin, una amplia gama de ciudadanos que si bien no tienen participación en el negocio de exportación de drogas ilegales,

¹⁸ Históricamente estas normas fueron claves en los procesos de ingreso a las clases superiores. Sobre este proceso de inducción de pautas de conducta "civilizada" en el curso del desarrollo de la sociedad moderna, ver Norbert Elias, El proceso de la civilización, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987.

sí contribuyen al asentamiento y legitimación de los inversionistas y lavadores.

Adicionalmente, muchos de estos negocios, dada su magnitud, novedad y estética, pueden servir para producir en la población local sentimientos de orgullo, puesto que tienden a mejorar la imagen de la ciudad, a satisfacer necesidades sentidas, incrementar el empleo y las oportunidades a inversionistas, al tiempo que enaltecen las imágenes de los narcotraficantes como benefactores locales y pavimentan la ruta de la legitimación.

LOS ORÍGENES SOCIALES DE LOS NARCOTRAFICANTES

Estas pautas de lavado dependen en un cierto grado de las habilidades de los empresarios, de sus orígenes sociales y de la permeabilidad de las estructuras sociales locales. Es posible que algunos narcotraficantes sean miembros de las cúpulas sociales locales, en no pocos casos puede tratarse de profesionales de estratos medios, aunque también de individuos súbitamente enriquecidos, pero que no disfrutan de reconocimiento y aceptación local. Otros pueden ser delincuentes comunes menores que se han potenciado con el narcotráfico, al que le han dinamizado especialmente su carácter violento.

Se puede esperar que los primeros gocen de mayor protección y complacencia local, lo que facilita tanto sus actividades económicas legales como las relaciones con autoridades locales. Los segundos, en cambio, tienen mayores dificultades de lograr aceptación, y es muy posible que tengan que imponerse combinando la violencia con un fuerte gasto redistributivo para comprar lealtades. Los terceros tienen que realizar muchos más esfuerzos, y su acceso a posiciones de poder y privilegio local será sin duda mucho más difícil, lo que les puede imponer la necesidad de coexistir localmente con los poderosos sin tener la pretensión de ser aceptados en los círculos más exclusivos. El que sean tolerados o no depende de que tengan la capacidad de lavar su propia imagen y hagan olvidar su oscuro pasado.

El origen rural o urbano de los narcotraficantes también tiene un peso importante tanto en su comportamiento como en su aceptación. Una cosa es un campesino enriquecido y quien busca gratificarse a partir de su acción filantrópica sobre la población local, reproduciendo y ampliando valores propios del tipo de comunidad de origen, y otra es el burgués urbano que, conociendo los hilos del poder local, logra incrustarse en esa estructura y concitar, al menos, la tolerancia de su presencia en los altos círculos locales. Otra es el representante de estratos bajos urbanos que asciende rápidamente y que busca con su capital apoyar mediante créditos o inversiones a industriales, comerciantes, financistas o políticos locales necesitados.

Las diferencias en los orígenes sociales de los narcotraficantes pueden también examinarse a partir de considerarlos como nuevos ricos cuyo proceso de lavado de imagen y búsqueda de respetabilidad los lleva a

desarrollar estrategias de enclasmiento, máxime si se orientan por horizontes de largo plazo¹⁹.

Mediante estas estrategias los narcotraficantes buscan reducir los límites de la oposición local a la competencia de nuevas fracciones dominantes, lo que a su turno depende de la fortaleza de esas fuerzas tradicionales. De hecho, será mucho más fácil para los nuevos empresarios incrustarse en medios en los que las fracciones dominantes tradicionales han perdido bases de poder y legitimidad social. Pero también lo será si la acción económica de esos nuevos empresarios se traduce en eventuales fuentes de mayor riqueza para esas fracciones, así no hayan sufrido menoscabos previos en su situación. Inversiones innovadoras que incorporen capitales tradicionales, o que incrementen la sensación de bienestar de la comunidad sin amenazar los privilegios existentes, utilización de recursos humanos en aventuras conjuntas, y compensaciones por eventuales menoscabos a su situación, son mecanismos que pueden hacer más permeables las estructuras sociales locales y facilitar los procesos de enclasmiento. En este proceso el papel de correas de transmisión de los consejeros es fundamental.

Es posible, por otra parte, que las confrontaciones con las autoridades del Estado central se traduzcan en conflictos locales, en cuyo caso si las fracciones dominantes toman partido por el Estado, tendrán a los narcotraficantes como unos enemigos con una muchísima mayor capacidad de lucha y de victoria. Es de esperar que en una eventualidad de este tipo las cúpulas locales opten por una posición conciliadora que garantice un equilibrio local, para lo cual es esencial, ante todo, la reducción de una posible violencia regional que obliga a la acción estatal.

NATURALEZA DEL LIDERAZGO POLÍTICO LOCAL

Regiones con un liderazgo político altamente monopolizado pueden facilitar el implante de los narcotraficantes, si logran hacerse a la lealtad del jefe local, o al menos una alianza de mutua conveniencia. En tales casos es posible que la convivencia no suscite mayores conflictos, lo que no sucedería en regiones donde la competencia política se puede traducir en pugnas en las que los narcotraficantes no sólo deben elegir, sino colaborar con sus amigos en la derrota de los competidores. Esta, a su turno, puede dificultar la vida de los narcotraficantes e inclusive propiciar denuncias y/o gestiones de la Fuerza Pública en su contra. En este último caso los nuevos actores sociales deben realizar esfuerzos adicionales para buscar equilibrios que funcionen al menos en lo que respecta a su supervivencia. Es normal que esta situación se traduzca en incrementos de los costos, puesto que será necesario

¹⁹Jorge Hernández, "Empresas: empresarios y trabajadores", en Jorge Hernández y Neftalí Téllez, "Aproximaciones al estudio sobre el impacto del narcotráfico en la región valle-caucana", Cali, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, Universidad del Valle (mimeografiado), p. 83. La idea de enclasmiento proviene de Pierre Bourdieu, La Distinción, Madrid, Editorial Taurus, 1988.

realizar gastos para la compra de lealtades entre más grupos políticos o de presión.

Pero el esfuerzo no se puede limitar a las relaciones con el liderazgo: la filantropía y la redistribución de ingresos desempeñan también en este campo un papel vital. Las obras de beneficencia local, los auxilios a los necesitados, los mecenazgos y la provisión de empleo se convierten así en cartas de garantía de poder. Y así muestran que es posible salir de la condición de pobres y dominados, que la movilidad social es posible y que ella es un premio a la audacia, astucia y valor, pero que viene acompañada de la solidaridad, el agradecimiento y el recuerdo del pasado. Más aún, es muy probable que la voluntad del nuevo jefe se traduzca en que las autoridades locales realicen obras de beneficio colectivo, y así incrementan su prestigio local.

Ahora bien, la ilegalidad no les permite asumir la función del liderazgo político formal, lo que implica la necesidad de utilizar testaferros. Políticos locales menores en trance de ascenso, pero sin las condiciones ni la financiación necesarias para hacerlo, son el tipo ideal para esta función. El narcotraficante puede así permanecer en la penumbra, pero su voluntad será realizada.

Es posible, sin embargo, que el jefe no tenga mayor interés en la ideología de los políticos respaldados. Esperará, eso sí, que hagan lo posible por protegerlo, y para ello tendrán que actuar en dos áreas: de una parte, mantener los límites de la acción represiva local del Estado; de otra, impulsar algunas políticas del Estado central que redunden en beneficio del negocio o de la vida misma del narcotraficante o que al menos no los hagan mucho más gravosos.

LAS FORMAS DE LA PRESENCIA REPRESIVA DEL ESTADO

Aunque en las regiones de producción la presencia de cualquier forma del Estado se constituye en un incómodo obstáculo para el negocio, en las de residencia el problema reviste características diferentes. De hecho, una gran mayoría de empresarios ilegales, al menos mientras no se encuentren huyendo, vive en las ciudades o en haciendas de regiones con fuerte presencia estatal, y de allí que el manejo de estas relaciones implique el recurso a múltiples técnicas de neutralización, cuando no de confrontación. El problema tiene en esta última territorialidad una doble dimensión: de una parte, las relaciones posibles con los aparatos civiles; de otra, con la Fuerza Pública. En aquellas regiones en las que los empresarios ilegales se mantienen en la penumbra política y no se constituyen en presas relativamente deseables para la acción represiva del Estado, el problema consiste en mantener unas relaciones de convivencia con los representantes de los aparatos judiciales y de seguridad. Para ello es preciso desarrollar estrategias y tácticas que incluyen pagos periódicos, presiones a través de los políticos locales, amenazas, engaños, acciones de los consejeros y, sobre

todo, apoyo por parte de la comunidad, que los defienda en casos de emergencia.

Los pagos se pueden realizar directamente, a través del otorgamiento de premios y prebendas a los jefes de las fuerzas de seguridad, propinas a los agentes y funcionarios menores, ayudas a las instituciones en su acción contra fuerzas subversivas o contra indeseables locales. Los políticos a su turno buscan influir sobre las autoridades para que garanticen el orden público local, lo que significa abstenerse de propiciar hechos que llamen la atención de esferas nacionales del poder. Y los consejeros tratan ante todo de que los narcotraficantes mantengan una presencia poco conspicua y que, sobre todo, controlen las dosis de violencia local, a fin de no llamar la atención de sectores de la opinión pública o del poder que pueden pedir una acción más decidida a la Fuerza Pública.

Mientras esto no suceda, es normal que los narcotraficantes logren colocar de su lado, o al menos neutralizar, los aparatos represivos locales del Estado. Al fin y al cabo algunos de sus agentes son, permanente o transitoriamente miembros de la comunidad, y cuando no lo son, encuentran arreglos informales de conveniencia mutua, y por tanto deben convivir con las estructuras locales de poder. En estas condiciones estos aparatos tienden a amoldarse a las condiciones que crean o encuentran, y las lealtades con el Estado central pueden ceder ante las presiones o prebendas locales.

El problema mayor se suscita cuando el control de ese orden público escapa de las manos de las autoridades civiles, policiales o militares locales, bien porque los narcotraficantes emprenden acciones contra el Estado que desbordan los marcos de la territorialidad, bien porque éste, sometido a presiones nacionales o internacionales, tiene que recurrir a la acción frontal. En este caso, si una cierta dosis de represión no es suficiente para calmar las presiones, una vez que las autoridades locales pierden el control de sus fuerzas de seguridad porque el Estado central asume el control, se desata un conflicto en el que la comunidad local puede llevar las de perder, porque se convierte en víctima de la confrontación. Ya sea porque la labor de represión estatal no distingue bien a sus objetivos y agrede indiscriminadamente a los ciudadanos, o porque la respuesta de los narcotraficantes puede adquirir una magnitud tal que produce víctimas entre la misma comunidad, lo cierto es que el conflicto puede tender a romper solidaridades locales, a dividir las opiniones, a agudizar los conflictos y conducir a una confrontación en la que la ciudadanía resulta involucrada como víctima de la violencia.

LA FORTALEZA O DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Es claro que la fortaleza o debilidad de las comunidades no impide la presencia de los narcotraficantes, sus testaferros o los procesos de cultivo y producción de derivados, pero también lo es que este factor hace que las cosas sean más o menos fáciles para los nuevos empresarios. De nuevo, aquí es necesario distinguir entre las territorialidades de producción y de residencia.

Las primeras pueden ser de dos clases: comunidades campesinas o indígenas tradicionales, y zonas de colonización poblamiento relativamente reciente. En bastante probable que en las primeras exista alguna tradición de consumo ritual, especialmente de coca. En estos casos el estímulo a la producción mercantil se traduce no sólo en una severa modificación de esas pautas tradicionales, sino en la destrucción de otras formas culturales ancestrales. Los productores directos se ven inducidos a producir bajo el acicate de nuevos y mayores ingresos, que se traducen en la transformación de pautas de consumo, en descomposición de formas tradicionales de liderazgo y en la ruptura de solidaridades ancestrales²⁰. Sin embargo, dado que en estas regiones la propiedad tiene una distribución relativamente definida y el control de la misma corresponde a la propia comunidad, quienes inducen la producción deben negociar con el conjunto de la población, así haya decisiones individuales por parte de algunos productores. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que existe la posibilidad de que la misma comunidad pueda negociar la continuidad o sustitución de los cultivos, lo que se traduce en que cualquier negociación puede estar condicionada a resultados de beneficio comunitario.

La situación en los territorios de nuevo poblamiento y colonización es bastante diferente. En ellos la carencia de tradición y organización comunitaria representativa se traduce en que la ampliación de cultivos depende de los productores directos, quienes se relacionan directamente con los intermediarios de los jefes de las organizaciones narcotraficantes. Las decisiones de sustituir o ampliar el cultivo no cuentan con respaldos comunitarios dotados de fuerza compulsiva. Aunque se generen organizaciones más o menos representativas en procesos de negociación, su fuerza no es suficiente para confrontar las diversas presiones sobre los cultivadores²¹.

Estas regiones son también generalmente asiento de organizaciones guerrilleras, de manera que el sistema de alianzas y poder se hace mucho más complejo. Es muy probable que la guerrillas se conviertan en un factor de estabilidad de la producción y el mercado y regule las relaciones entre los intermediarios de la coca, los productores directos y las autoridades locales²². Sin embargo, este sistema de relaciones se puede traducir en una paradoja perversa: el control de cultivos podría conducir a alianzas entre las guerrillas y los propietarios locales, en detrimento de la fuerza de trabajo asalariada y de los pequeños propietarios que por no estar involucrados en el cultivo no pueden enfrentar las condiciones del mercado y se ven obligados a abandonar sus parcelas.

De otra parte, la expansión de cultivos en estas regiones, y las consecuentes campañas de erradicación, han potenciado los procesos típicos de las

²⁰ Hernández, *op.cit.*

²¹ Jaime Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando Cubides, *Colonización, coca y guerrilla*. Bogotá, Universidad Nacional, 1986.

²² Alfredo Molano, obras citadas.

zonas de colonización: es decir, la expansión de la frontera agrícola, la institucionalización del endeudamiento del colono con los comerciantes locales, la pérdida de la tierra y la conversión de ésta en propiedad de capitales ganaderos.

En lo que respecta a la territorialidad de residencia, algunos de los argumentos expuestos en relación con los orígenes sociales de los nuevos ricos y la estructura del liderazgo local tienen también vigencia. Hay sin embargo otros elementos que complementan la situación. Concretamente, las estrategias de enclasmiento tienen como contraparte las posibilidades de aceptación o rechazo por parte de la comunidad local²³, cuya naturaleza cerrada o abierta determina las probabilidades de respuesta positiva o negativa a las pretensiones de que sean aceptados.

Ahora bien, esa naturaleza cerrada o abierta no necesariamente caracteriza a la totalidad de la sociedad local. Ello dependerá, entre otras cosas, de los grados de desigualdad en la estratificación social, de las pautas de aceptación social de las fuentes tradicionales de privilegio y de las gestiones de la propia élite en favor del resto de la comunidad. En comunidades con clases dominantes fuertes y cerradas, a las que no tienen acceso los narcotraficantes, es posible que éstos se limiten a pertenecer a estratos medios que, a pesar de contar con ingentes recursos económicos, no pueden acceder a las posiciones de prestigio social. Pero en sociedades locales en las que las cúpulas no pueden mantener monopolios sobre esas posiciones, bien porque no han logrado ponerse a tono con cambios sociales, económicos y culturales que se producen en su seno, bien porque sus posiciones de dominación no emanan de fuertes tradiciones y abolengo sino, por el contrario, han accedido relativamente tarde a ellas, los nuevos ricos pueden acceder a las cúpulas sociales con cierta facilidad.

Los niveles de aceptación social en otras capas de la sociedad son relativamente más fáciles. La redistribución de ingresos a través de la filantropía, la demostración de que es posible triunfar en la vida a pesar de tener orígenes humildes, la exhibición de valores adecuados a los repertorios populares, son recursos que incrementan las probabilidades de aceptación social de los nuevos ricos entre las capas medias o bajas de la sociedad local.

Es muy posible que los nuevos empresarios sean aceptados, pero esto no implica que otros miembros de las organizaciones ilegales lo sean. Tal puede el caso de los pistoleros a su servicio, quienes pueden desatar violencia en la comunidad local, o de pequeños intermediarios que no miden bien su

²³ Sobre las prácticas de cierre de acceso a privilegios de "extraños" y mantenimiento de monopolios sobre posiciones de prestigio, riqueza y poder, ver Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1964, T.I, pp. 35 y ss., y The City, New York, Collier Books, 1958. En torno a las relaciones entre los detentadores tradicionales de poder y los "extraños", ver Frank Parkin, "Social Closure and Class Formation", en Anthony Giddens y David Held, eds., Classes, Power and Conflict. Classical and Contemporary Debates, Londres, The Macmillan Press, 1982, pp. 175-186.

acción y cometen desafueros contra sectores de la población. Ellos seguramente no encuentran aceptación, y algunas organizaciones de la comunidad pueden rechazarlos, lo que a su turno probablemente se traduce en mayores dosis de violencia. Es típica en este orden de ideas la violencia que se emplea, por ejemplo, contra organizaciones políticas de oposición, grupos defensores de los derechos humanos, la democracia y la convivencia ciudadana o periodistas que denuncian su presencia. En tales casos la coexistencia de estos pistoleros con la comunidad está garantizada por el terror que logren imponer.

En estas condiciones uno de los mayores esfuerzos que deben realizar los empresarios ilegales es tratar de controlar los comportamientos de sus organizaciones armadas, y en caso de que ello no sea posible, tratar de desligarse de ellas, permitiendo que las autoridades las repriman. Se colocan así en la difícil posición de repudiar públicamente a quienes les son indispensables como soporte armado privado. Otro es el caso en el que el sistema interno es tan fuerte que los empresarios se ven obligados a ir a la guerra con las autoridades para salvaguardar la integridad de su organización armada.

Finalmente, las guerras entre organizaciones rivales se puede convertir en un obstáculo para la absorción local de los narcotraficantes. Es muy probable que en estas condiciones ellos recurran a algunas organizaciones sociales locales en busca de protección y apoyo, el cual será más fácilmente obtenible si los conflictos enfrentan a algunas bandas locales con otras de otras regiones. En este caso las primeras pueden mostrar la amenaza externa como riesgos no sólo para ellas, sino para el conjunto de la comunidad local. En ese caso es probable que logren movilizar respaldos y protección, en defensa tanto del buen nombre de la comunidad como de la paz local. Ser víctima, pues, puede ser una buena condición para el mejoramiento o la supervivencia del nuevo empresario ilegal.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

No parece aventurado afirmar que quien conozca medianamente el sistema social construido por la nueva actividad económica ilegal en Colombia, reconoce que se encuentra reflejado, así sea parcialmente, en el esquema anterior y de allí que algunas de las descripciones y análisis puedan parecer diseñadas simplemente para sistematizar observaciones empíricas. Sin embargo, el mayor valor del esquema estriba en una doble potencialidad: por una parte, para elaborar estudios regionales comparativos, por otra, para comprender y enriquecer la compleja red de determinaciones que caracterizan las relaciones entre las comunidades locales y los nuevos actores que en ellas se asientan.

El esquema podría ser útil, por ejemplo, para explicar cómo en ciertas ciudades y regiones colombianas se observan pautas de convivencia que en otras podrían parecer imposibles. Cómo la violencia, que es un recurso

inherente a la naturaleza ilegal del negocio puede administrarse y hacerla depender de condiciones que se asocien tanto con la política global del Estado, como con los arreglos locales.

En algunas ciudades y regiones colombianas en las que es notoria la coexistencia de los narcotraficantes con las élites tradicionales y la Fuerza Pública local, ésta se ha interpretado a partir de explicaciones que hacen énfasis en la corrupción. Pues bien, es posible aportar hipótesis adicionales que permitan explicar las bases de esa coexistencia en la intersección de las acciones de los nuevos empresarios y las estructuras de clases sociales y del poder en esas ciudades y regiones, es decir sobre bases más sociológicas y políticas que jurídicas. Desconocer estas relaciones implica no sólo distorsionar los panoramas, sino no comprender los recursos culturales y estratégicos que en ellas se desarrollan para lograr un equilibrio que no sólo garantiza la supervivencia de las estructuras locales, sino que redundará eventualmente en beneficios tangibles.

En síntesis, la estructura y acción de la nueva actividad ilegal no es igual en el país, a pesar de las exigencias internacionales del negocio. Las determinaciones regionales son importantes porque al fin y al cabo, los nuevos empresarios, así sean ilegales y delincuentes, son actores sociales, pero más aún, son seres humanos.

Otras enseñanzas adicionales pueden quedar: una de ellas es el reconocimiento de que a pesar de su extensión en el territorio nacional y su evidente carácter internacional, los arreglos institucionales y culturales locales operan para moldear y determinar las condiciones para la supervivencia, expansión o fracaso de los traficantes. Es claro que la capacidad económica de los jefes del negocio es tal que pueden romper barreras locales. Se dice que ellos violan todas las leyes, excepto la de la oferta y la demanda. Sin embargo, algunas normas socioculturales pueden hacer esta empresa más difícil, costosa y arriesgada, o por el contrario, ayudan a facilitarla.

Uno de los mecanismos más sutiles y eficientes en el implante es sin duda el manejo y control de la violencia. El que ésta sea fruto del triple carácter de delincuentes comunes, empresarios ilegales y aspirantes a formar parte de las cúpulas sociales y políticas no debe oscurecer el hecho de la violencia es también un recurso para subsistir en el negocio, pero también para garantizar tanto la no presencia de competidores como para mantener un orden local. El control del negocio, así, se puede convertir en un mecanismo que le facilita a los propietarios locales tradicionales el manejo y seguridad de sus propias actividades. Así los nuevos empresarios ilegales ganan aprecio y respetabilidad entre los poderosos locales. Pero tiene que haber además un esfuerzo para reducir la violencia a estas formas requeridas, a fin de no atraer la atención de los aparatos represivos del Estado que no forman parte de los arreglos y acomodamientos aceptados localmente.

Finalmente, algunos representantes de la opinión pública local consideran que el tiempo se encargará de lavar las imágenes, hacer olvidar las

fechorías y otorgar un sitio a estos nuevos actores sociales. Si esto fuera cierto, el panorama global del narcotráfico debería ser mirado sin la lente de horror que ya se ha hecho común entre nosotros. Muy probablemente, según esta línea de observación, los traficantes no son agentes del apocalipsis, sino empresarios en ciernes, de los cuales hay ejemplos en otros países²⁴. Si continuaran en esta línea de conducta y logaran suavizarse plenamente, la aceptación social podría no estar limitada a las territorialidades de residencia: podrían ganarla en el plano nacional. Se podrían convertir en los nuevos propietarios: terratenientes, financistas, comerciantes e industriales. Dadas las gestiones de los consejeros y asociados, muy probablemente ejercerían sus poderes con menos uso del recurso de la fuerza bruta y la violencia.

Por sus orientaciones valorativas francamente conservadoras y defensoras del orden social que les permitió acomodarse socialmente, sería de esperar que defendieran ese orden mediante la exacerbación de los mecanismos que las clases dominantes han utilizado tradicionalmente. Incluso podrían importar a la vida legal algunos de sus propios recursos violentos, aunque mediante una utilización más subrepticia y ciudadosa. El que este ejercicio de dominación no deje mucho espacio abierto para la democracia, la convivencia y un cambio social deseable para quienes aspiran a procesos de democratización de la sociedad colombiana, es un hecho mucho más grave que la confrontación de corto plazo, "coyuntural", con unos narcotraficantes convertidos en terroristas y enemigos públicos.

²⁴Un antecedente teórico para el examen de estos procesos se encuentra en Allen Solganick, "The Robber Baron Concept and its Revisionists", *Science and Society*, Vol. XXIX, # 3, Summer, 1965, págs. 257-269; Norman L. Hicks y Allen Solganik, "Robber Barons and Revisionism", *Science and Society*, Vol. XXX, # 2, págs. 191-206.

